

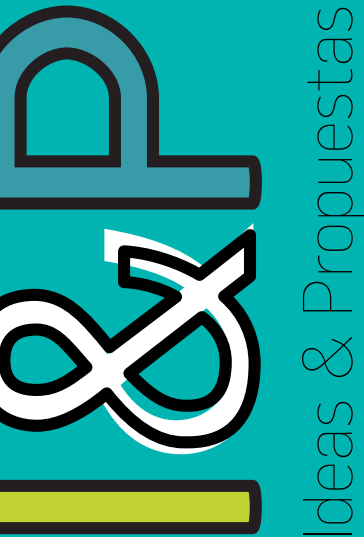
# FJG

FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN

## PRIMER MES DEL GOBIERNO DE BORIC: CAMINO AL DESENCANTO

---

Nº 344 | 06 de abril 2022



## RESUMEN EJECUTIVO

A contar del 11 de marzo ha comenzado un nuevo período presidencial encabezado por Gabriel Boric. Obviando el quehacer de la Convención Constitucional, cuyos avances requerirían tratamiento aparte, nos permitimos examinar el detalle de sus 25 primeros días como nuevo mandatario y sus personeros, así como la percepción que han provocado dentro de la opinión pública los hitos más significativos, especialmente en las decisiones que han adoptado y en donde el Gobierno ha dejado ver su primera impronta.



Foto: [duna.cl](https://duna.cl)

## I. DESDE UN COMIENZO

Tras su elección el pasado 19 de diciembre de 2021, los preparativos del equipo de Gabriel Boric para la toma del poder fueron acompañados de diversos actos simbólicos que buscaron aunarlos con sus adherentes. Hubo mucho de gesto refundacional en ellos, una de las razones por la que parte importante de su electorado lo eligió. A estos gestos esperanzados trató siempre el Presidente electo de responder de algún modo, incluso al fanatismo de la prensa por saber hasta sus más personales aficiones; todo mientras él y su gente se ocupaban, por lo menos durante dos meses en la llamada “Moneda Chica” de Providencia, de planificar el arribo de sus personeros al Gobierno.

En vísperas de la transmisión de mando, y salvo los llamados a movilizarse el mismo 11 de marzo por algunas agrupaciones izquierdistas y antisistémicas, el

panorama parecía favorable para el nuevo mandatario y así lo auguró el desarrollo casi sin incidentes de las manifestaciones feministas del 8 de marzo, muy distintas a las de los últimos años. Este flanco parecía a cubierto con el cumplimiento de la promesa de nombrar un gabinete con paridad de género, lo que autorizó a la prensa, sobre todo extranjera, para decir que este era el “primer gobierno feminista de Chile”.

El mismo día 11 quiso continuarse en la lógica de los signos para un nuevo Chile, con un desayuno junto a dirigentes vecinales de la Región de Valparaíso y otros actos más que acabarían el domingo 13, pero rápidamente comenzó a notarse que no habían reparado en que la significancia de lo comunicado ahora había cambiado, en la medida que pasaban de ser autoridades futuras a unas en pleno ejercicio.

Y el primer mensaje fue dejar sin invitación para la ceremonia a un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), principal gremio del empresariado nacional. Dada la retórica consagrada con los hechos de octubre de 2019, se interpretó rápidamente que los organizadores partidistas del evento se habían dado un lujo con este desaire (es poco creíble el argumento del protocolo sanitario), formando la primera pésima señal acerca del diálogo que el Gobierno podría pretender con dicho sector de la sociedad.

Tanto peor cuando en lugar de dejar resonando alguna frase de su discurso de arribo al Palacio de La Moneda, fue el propio Presidente quien lo opacó dando sendas cuñas periodísticas a una entrevista, atribuyendo el retraso de la ceremonia de transmisión a la demora de Felipe VI, rey de España, lo que generó una declaración de la Casa Real y ácidas críticas de parte de la prensa hispana, así como su indignación ante sus adherentes en La Pintana el pasado domingo 13, acerca de la presencia de los exarzbispos Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz en el tedeum celebrado el día anterior, a continuación de una ceremonia ritual con representantes indígenas en palacio.

El comenzar su mandato provocando innecesarias tensiones con autoridades internacionales o una

institución que, aunque perjudicada moralmente por los abusos de parte de su clero, sigue siendo de significativo aporte y expresión de la fe del país, no parecen meros actos de inexperiencia en el cargo, sino el ejercicio de un cierto sentido de superioridad moral con el que pareció querer entrar imponiéndose, anunciando que llegaba para hacer justicia a su modo, una pose que hemos visto en otros mandatarios latinoamericanos. Algo similar a su saludo con la mano abierta y luego, el puño revolucionario, especie de clave para sus correligionarios, de que “sigo siendo uno de ustedes, pero acá tengo que fingir”, lo cual está lejos de un sentido de representatividad mayoritaria.

De hecho, la situación con la Iglesia Católica tendría un reglón aparte, pues casi en paralelo a su ascensión, las redes sociales anunciaban que el sacerdote jesuita Felipe Berríos era convidado a encabezar como “coordinador de campamentos” una instancia organizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, bajo comunicado oficial del provincial de dicha congregación católica. Sin embargo, raudo lo desmintieron el ministro de la cartera, Carlos Montes y el propio Presidente. Berríos apareció descartando la nominación, aunque días después, investigaciones de prensa señalaron que la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, había sido pieza clave en revertir el nombramiento, lo que algunos atribuyeron a la actitud “anticlerical” de parte del oficialismo.



Foto: latercera.com

## II. FRENTE A LA VIOLENCIA, AMBIGÜEDES

A excepción de la exigua convocatoria a protestar contra Boric el mismo 11 de marzo, el mayor incidente de orden público pudo ser aquel día el bloqueo de ruta por algunos camioneros en la Región de Tarapacá, queriendo visibilizarse ante el nuevo Gobierno para recordarle que las complejidades develadas tras las manifestaciones de febrero en la zona no habían acabado. El aumento de la violencia y las complejidades asociadas a la alta tasa de migrantes recibidos en la zona, llevaron a decretar aquí el estado de excepción constitucional y el nuevo Gobierno se manifestó favorable a su prórroga, conseguida el día 16.

No obstante, y como venían preanunciándolo, dicha posibilidad no estaba considerada para la llamada “Macrozona Sur”, a pesar de las evidencias de mayor violencia, capacidad de fuego, etc. De hecho, un atentado del grupo Weichan Auka Mapu (WAM) en Contulmo (13 de marzo) mostró que para esta agrupación no habría trato preferencial con el nuevo Gobierno.

Así y todo, la muestra más evidente la acabó sufriendo la propia ministra del Interior, Izkia Siches y su comitiva dos días más tarde en dirección a la comunidad de Temuicui, donde hallaron la ruta bloqueada y fueron intimidados con una serie de disparos; de lo que se quiso responsabilizar a Carabineros por aparentes fallas de seguridad, lo que llevó a declaraciones del mismísimo General Director afirmando que se había cumplido la debida planificación del viaje. Luego de esto, otras organizaciones autonómicas como Ad Mapu (23 de marzo) y la propia Coordinadora Arauco Malleco (CAM) (3 de abril) han rechazado el diálogo o colocado condiciones draconianas que escapan al Estado de Derecho, así como también lo muestra el ultimátum de 48 horas exigido por Resistencia Mapuche Lavchenke (RML) el pasado 2 de abril. A pesar de esta clase de evidencias, anteriores y posteriores, la extensión del Estado de excepción en la zona fue descartada por el Gobierno y expiró el pasado 26 de marzo, implicando después que el propio subsecretario del Interior fuera bloqueado en su ruta a Cañete (30 de marzo).

A pesar de lo sucedido a la ministra Siches, fue ella y el mismo día que sufrió la amenaza armada cuando quiso condescender con la causa autonomista, abriéndole un flanco a su propio Gobierno al referirse a la necesidad de hablar de los “presos políticos” mapuches. Esto luego llevaría el día 17 a que la prensa revelara la diferencia de criterios al respecto entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, negando la existencia de dicha categoría de reos en el país, mientras que el ministro Secretario General de Gobierno, Giorgio Jackson, aparecía afirmando que sí habían existido persecuciones y “prisión política”, incluso confirmadas como “montajes”. A pesar de la discordancia develada, el 24 de marzo volvería la ministra Siches a exponerse en ICARE diciendo que no debía temerse al uso del concepto *Wallmapu*, lo que acarrearía un *impasse* de alcances internacionales.

Otro par de ambigüedades del nuevo Gobierno respecto a la violencia lo forman las disculpas públicas que el ministro de Economía, Nicolás Grau, presentó a nombre del Estado de Chile el pasado 17 de marzo a los locatarios de los alrededores de la Plaza Baquedano, dañados por más de dos años de vandalismo político. Sin embargo, la violencia no ha logrado ser consumida del todo continuando los viernes 18 y 25 de marzo, así como 1° de abril. Por otra parte, el 22 de marzo, el ministro Jackson informó de la suma urgencia que el Gobierno colocaba al proyecto de amnistía a los presos por desórdenes posteriores al 18 de octubre de 2019. Esta aceleración en la tramitación provocó la queja

de senadores PS, afines al actual Gobierno, aunque no por razones de seguridad pública sino por el incómodo momento para discutirlos, cuando se busca cuidar la popularidad para el plebiscito constitucional de salida de septiembre y en vistas a un hipotético quinto retiro de fondos previsionales. El *impasse* del Gobierno y estos parlamentarios se selló este 4 de abril, quitando la urgencia para volver luego a colocarla.

Tanto peor si consideramos que en la citada jornada de ICARE (24 de marzo), la ministra Siches insinuó segregación por parte del sistema judicial: “Si pilló a una persona en Las Condes, es rubio y con apellido, no pasa nada”, mientras que con motivo del uso del arma de servicio por parte de un carabinero durante los incidentes en Santiago centro asociados al llamado “Día del Joven Combatiente”, la ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro sintió necesidad de poner la sospecha en el funcionario público demandando la refundación de esta policía.

Esta enorme cantidad de antecedentes contradictorios parecen develar, por una parte, las dos almas (radical e institucional) que se debatan en el interior de la coalición de gobierno y por otra, que los nuevos gobernantes aún se ven como una oposición sin asumir las responsabilidades más penosas del Estado, el que ahora encabezan, pero todavía sienten el deber moral de criticarlo y poner su primera sospecha en sus subalternos antes que un respaldo acorde con las leyes y la fuerza que merece el Estado de Derecho en una democracia genuina.



Foto: infogate.cl

### III. FRENTE A LA INFLACIÓN, MÁS DIVERGENCIAS

Además de la ley de amnistía, el roce entre el Gobierno y sus parlamentarios ha aparecido bajo la negativa manifestada por la ministra Vallejo (21 de marzo) en torno a un apoyo del Gobierno al “quinto retiro”, que volverían impopular prematuramente al Gobierno, a ojos de algunos de sus parlamentarios.

Por su parte, las declaraciones de la ministra Siches (25 de marzo) complementadas con las que el propio presidente ha compartido ante la

prensa argentina (4 de abril) son respuesta más que evidente que la capitalización individual no es siquiera considerada como alternativa a elección por parte de los ciudadanos a los que deben incorporarse a un sistema previsional obligatorio.

Finalmente, las medidas del “Plan de Recuperación Inclusiva” anunciadas por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel (1° de abril) son, quizá, las definiciones más serias que hemos podido atestiguar durante estos 25 días.

## IV. DEFINICIONES INTERNACIONALES

En breve tiempo, el Gobierno de Boric ha dado un número significativo de pronunciamientos en materia internacional que dan señas de sus lineamientos en la materia. El primero fue la rauda ratificación del acuerdo de de Escazú (18 de marzo), con el que pretende ser fiel a sus convicciones medioambientales y desmarcarse de la política diplomática de Sebastián Piñera, quien se abstuvo de ratificar el documento. El mismo día fue retirado de Contraloría el decreto que establecía nuevos requisitos para residencia temporal en el país, lo que parece que va en igual dirección y tanto más la suspensión de actividades de Chile en PROSUR (4 de abril), iniciativa latinoamericana que debía sus principales impulsos al propio expresidente Piñera y al presidente de Colombia, Iván Duque, ambos de ideas derechistas.

Otro gesto, aunque polémico, lo marcó la confirmación del nombramiento de la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, como embajador en Argentina (27 de marzo). Por un lado, su trayectoria político-sindical parecía contradecir las promesas de campaña de que las embajadas no serían “premios de consuelo” a dirigentes afines, y por otra parte, su carrera pública parece una especie de guiño hacia el kirchnerismo argentino. No obstante, coincidió con los efectos de los dichos de Siches acerca del *Wallmapu*, donde varios parlamentarios transandinos condenaron el uso del término como una reivindicación territorial

que atenta contra la soberanía territorial argentina, a lo que Siches replicó con que sólo se refería en lo que respecta a los territorios chilenos implicados (31 de marzo). Con todo, la funcionaria de Estado una vez más se pone del lado de los que se oponen a éste, usando con ligereza un término reivindicativo cuyos efectos fueron inmediatamente percibidos del otro lado de los Andes.

Casi en vísperas de la gira presidencial al vecino país, la ministra de Relaciones Exteriores vino a añadir (3 de abril) otro episodio al que aún no suma un mes de gobierno al negarse a dar declaraciones enfáticas acerca de la continuación de la solicitud de extradición de uno de los asesinos de Jaime Guzmán, Galvarino Apablaza, o si Chile poseía las condiciones para un juicio justo a éste. De alguna manera, el propio Presidente Boric subsanó la situación en conversación personal con el presidente Alberto Fernández, manifestándole la posición chilena de Estado en la materia. Durante esta gira, además (4 y 5 de abril) nuestro mandatario afirmó tener con el Gobierno argentino una relación de “complicidad”, lo cual, salvando las inmediatas coincidencias ideológicas que ambos presidentes y el lazo común histórico entre ambos países, parece entrever una suerte de admiración por un modelo de Estado, economía y sociedad que está fuertemente cuestionado por los propios argentinos y no parece ser referente para Chile.



## V. EDUCACIÓN: EL FACTOR INADVERTIDO

De que educación y violencia son tópicos que desde hace bastante vienen sonando juntos, lamentablemente ya no causa sorpresa. Baste recordar los ataques incendiarios de los "overoles blancos" contra las dependencias del Instituto Nacional o las evasiones sobre los torniquetes del Metro, antecedentes del apodado "Estallido Social" de octubre de 2019. Lo sorprendente es que ahora tantos hechos y en tan diversas latitudes del país, hayan aparecido signados por la antedicha conjunción y durante el primer mes de gobierno del presidente Boric, hasta volverse una inadvertida emergencia para este.

Además de la convocatoria a protestas desde el mismo 11 de marzo por agrupaciones estudiantiles de izquierda, el pasado 17 de marzo un grupo de estudiantes, principalmente mujeres, de diversos establecimientos santiaguinos marcharon a la sede del MINEDUC a entregar un petitorio tras el descubrimiento de una red digital con participación de estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria (Providencia), quienes en las redes amenazaban con realizar violaciones masivas, en símil al fenómeno de "La Manada", ocurrido en España (2016).

A ello se sumó el pasado 22 de marzo una manifestación de motivación similar en Talca tras saberse la desvinculación de un docente acusado de acoso en el Liceo Técnico Amelia Courbis, pero acabó con el

apuñalamiento de un alumno contra otro en plena vía pública. Dos días más tarde se constataron sucesos semejantes al interior de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso.

En ese contexto se llegó al llamado "Día del joven combatiente" el viernes 25 de marzo, donde estudiantes e individuos de edades cercanas fueron los principales involucrados en las manifestaciones en la vía pública, donde destacó el nuevo tumulto que ingresó por fuerza al edificio consistorial de la Municipalidad de San Bernardo, agresiones que también fueron violentamente contestadas por vendedores ambulantes en Estación Central y el ya citado caso que llevó a un carabiniero al uso de su arma de servicio.

Comenzando la nueva semana, el lunes 28 de marzo se supo de la decisión de las autoridades del Liceo Industrial Benjamín Franklin de Quinta Normal de suspender sus clases tras la vitalización de un video amenazando con una masacre escolar en el establecimiento. Al día siguiente, un vídeo similar llegó a la comunidad del Liceo Armando Robles Rivera de Valdivia, aunque en este último caso la policía cree haber ubicado a uno de los responsables, que está bajo detención.

A la hora del análisis de los gatillantes de estas conductas, que ya dan qué hablar en la prensa,



Foto: lanacion.cl

compartimos que parte de las explicaciones pueden radicarse en las consecuencias indeseadas de las cuarentenas, asociado a la despersonalización de la convivencia escolar y la acentuación de dinámicas de vulneración intrafamiliar.

Sin embargo, no reparar en el daño hecho por la validación a la violencia política ocurrida desde 2019 y antes, donde una parte de la sociedad coreó un discurso laudatorio hacia los estudiantes involucrados, elevándolos al falso pedestal de "luchadores sociales", es una forma de encubrir una dinámica que comienza a llegar a escapársele incluso a quienes han recogido los frutos políticos de estos años de río revuelto. La violencia una vez selectiva con mucha facilidad puede verse por su ejecutor como la llave que puede conseguirle rápidas

soluciones personales hasta en las índoles más domésticas. Una vez celebrada la violencia antes criminal, es difícil retrotraerla o acotarla a lo único donde nosotros la consideramos legítima.

El ministro de Educación Marco Antonio Ávila (5 de abril) asume la culpa considerando que la suspensión presencial de clases pudo ser excesiva y hasta dañina a este respecto. No obstante, esta clase de confesión ahora parece de balde cuando la entonces oposición política y social, ahora devenida en gobierno (véase a la doctora Siches, entonces presidenta del Colegio Médico), fue tan obstinada al exigir las más estrictas medidas de confinamiento, hasta el punto de acusar al anterior gobierno de menospreciar las vidas humanas de los ciudadanos por no adecuarse a los planes por ellos propuestos.

## **CONSECUENCIAS CONSTATABLES Y PREVISIBLES**

En declaraciones del recién pasado 4 de abril, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Camila Vallejo, dijo que “...no podemos en solo tres semanas resolver los problemas que se arrastran durante décadas”. Ha sido un argumento similar al que se ha oído a los adherentes al nuevo gobierno. Sin embargo, el largo preparativo previos a su llegada al poder y la cantidad de errores no forzados, en los que la oposición casi no ha tenido participación, hacen impresentable aquel argumento pues, si bien difícilmente podrían exigírsele logros materiales, son estas definiciones iniciales las que pueden verificarse; las que ciertamente han estado marcadas por el signo de la contradicción. El mayor efecto adverso que esto está provocando es el acelerado descenso en la popularidad del Presidente, constatado en las encuestas, y aunque factible una mayor coordinación, sobre todo tras el cónclave en Cerro Castillo (25 de marzo), ello no obsta la insoluble unidad entre radicales e institucionales este Gobierno pretende lograr.



Capullo 2240, Providencia.

[www.fjguzman.cl](http://www.fjguzman.cl)

 /FundacionJaimeGuzmanE

 @FundJaimeGuzman

 @fundacionjaimeguzman